

Cuando la política se vuelve represalia



Andro Mimica Guerrero

Exseremi de Gobierno

Hay decisiones que no son técnicas, no son administrativas y no son casuales. Son derecha y calculadamente políticas. Y lo que hoy está ocurriendo en Magallanes tiene nombre y tiene intención: castigo.

Castigo a una región completa, castigo a su gente. Castigo, curiosamente, a la tierra donde nació el Presidente Gabriel Boric.

Porque cuesta encontrar otra explicación cuando, bajo el gobierno de José Kast, comienzan a alinearse decisiones que, en conjunto, no hacen más que empujar a Magallanes hacia atrás. En un mes han encadenado no hechos aislados, tienen más forma de patrón.

Se congela el desarrollo del Club Hípico de Punta Arenas, un proyecto con impacto social, turístico y comunitario. No era un lujo: era una oportunidad para dinamizar la economía local, ¡la Delegada Presidencial argumenta algo absolutamente falso sobre su cambio de uso de suelo y posteriormente el Ministro Poduje aduce a falta de recursos, pero, SORPRESA!!!!, acto seguido el MINVU anuncia el parque Sebastián Piñera en Puerto Montt.

Se encarece el transporte marítimo, particularmente con TABSA, golpeando directamente el bolsillo de quienes dependen de la conectividad para vivir, trabajar o simplemente trasladarse. En una región donde moverse no es opcional, subir tarifas no es un ajuste: es una carga.

Se debilita la política de zona extrema, una herramienta clave que durante años permitió equilibrar, aunque sea parcialmente, el alto costo de vida del sur. Quitar o reducir ese apoyo no es neutral: es profundizar la desigualdad territorial.

Se congelan proyectos del MOP, deteniendo inversión pública, frenando empleo y postergando infraestructura que no puede seguir esperando, alzando la voz de la Cámara Chilena de la Construcción que ve con preocupación cómo se desarrollan las nuevas decisiones.

Y mientras todo esto ocurre, el costo de la vida sigue escalando, combustibles impagables y aumenta la inflación. Vivir en Magallanes ya es, en muchos casos, hasta un 30% más caro que en la zona central. Cada alza, cada recorte, cada proyecto detenido no es una casilla del Excel, es una familia que aprieta más el presupuesto, un trabajador que pierde oportunidades, una comunidad que ve cómo el desarrollo se estanca.

¿De verdad todo esto es coincidencia? ¿O estamos frente a una forma de hacer política donde las regiones también pagan las diferencias ideológicas?

Porque aquí no se está afectando a un gobierno. No se está golpeando a una figura presidencial. Se está golpeando a la gente. A quienes eligieron quedarse en el extremo sur del país, a quienes sostienen la soberanía, la identidad y el desarrollo de un territorio estratégico para Chile.

Magallanes no puede transformarse en un símbolo de disputa política. No puede ser utilizada como terreno de ajuste ni de revancha.

Gobernar Chile implica entender que el país no termina en Santiago y reconocer que hay realidades distintas, costos distintos y necesidades urgentes que no pueden esperar decisiones tomadas a miles de kilómetros de distancia.

Castigar a Magallanes no debilita a un adversario político. Debilita a Chile.